Análisis de coyuntura No 12/2026

A un año de Rodrigo Paz, entre el ajuste sin horizonte y la captura de la justicia

Autor: *Hernán Mariobo Orgaz*

El 8 de noviembre de 2025, Bolivia cerró formalmente un ciclo de casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) con la promesa de inaugurar una etapa de renovación institucional, alivio económico y reconciliación democrática. Doce meses después, el primer aniversario del presidente Rodrigo Paz Pereira ofrece una radiografía muy distinta: un Ejecutivo desgastado - cuya desaprobación roza el 59% frente a un magro 25% a 32% de respaldo en las encuestas de opinión -, una economía atrapada entre la contracción y la carestía cotidiana, y un preocupante giro hacia el control político de los tribunales como sustituto de la gobernabilidad democrática.

Para **Futuro Bolivia**, el país no está transitando hacia una modernización del Estado, sino hacia una peligrosa mutación del viejo hiperpresidencialismo: un gobierno que administra la crisis mediante parches recesivos mientras descubre en la instrumentalización de la justicia su principal herramienta de supervivencia y disciplinamiento político.

1. La economía del relato frente a la realidad del bolsillo

La estrategia comunicacional del Palacio de Gobierno para esta semana aniversario ha apostado por la saturación administrativa. Ante la imposibilidad de garantizar un escenario controlado en el Parlamento, el presidente Paz optó por entregar su informe anual por escrito e instruir que sus 12 ministerios rindan cuentas desde las 07:00 de la mañana, uno por día. El relato oficial se sostiene sobre tres pilares: la reducción del aparato burocrático de 21 a 12 carteras, la recuperación contable de las Reservas Internacionales Netas (RIN) hasta los 4.399 millones de dólares y el salvavidas crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares.

Sin embargo, detrás de la aritmética macroeconómica —forzada por las exigencias del FMI para flexibilizar el régimen cambiario y retirar gradualmente la subvención a los combustibles— late una economía real asfixiada. El propio organismo multilateral proyecta una contracción del 3% para este 2026 y del 1,5% para 2027. La estabilización financiera no se ha traducido en reactivación productiva, sino en endeudamiento externo y pérdida del poder adquisitivo.

La calle refleja hoy ese divorcio entre los indicadores de gabinete y la mesa familiar:

- **La crisis del pan de batalla:** El rechazo de los panificadores a la oferta estatal de harina a 310 bolivianos el quintal y la consecuente subida unilateral del pan de 0,50 a 1 boliviano en plazas como Cochabamba desnudan la incapacidad gubernamental para asegurar cadenas básicas de abastecimiento y costos productivos viables.
- **El conflicto con el Magisterio Urbano:** El paro movilizado de 48 horas iniciado este lunes contra una improvisada descentralización educativa —respondido desde el Ministerio de Educación con amenazas de descuentos salariales— demuestra que el Ejecutivo confunde reforma estatal con transferencia de crisis.

Desde **Futuro Bolivia** sostenemos que ordenar las cuentas fiscales es indispensable, pero un ajuste sin un plan de choque productivo, sin seguridad jurídica para la inversión y sin protección a la economía

popular solo administra la escasez. No basta con achicar ministerios si el Estado sigue funcionando como una estructura extractiva, centralista e ineficiente.

2. Fractura legislativa y el engaño del 1% en el Pacto Fiscal

La debilidad política del oficialismo tiene su epicentro en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La pugna abierta entre el vicepresidente de la República y presidente nato de la ALP, Edmand Lara —quien llegó al poder como el rostro antisistema de la fórmula y hoy opera con agenda propia—, y los flamantes presidentes del Senado (Ávila) y de Diputados (Castro) ha sumido al primer órgano del Estado en una parálisis institucional. La clausura de la legislatura 2025-2026 en ausencia de Lara, seguida de amenazas cruzadas de procesos penales, convierte la sesión inaugural de la Legislatura 2026-2027, convocada para este miércoles 11 de noviembre, en un campo minado.

Esta descomposición en la cúpula del poder central coincide con una rebelión legítima desde las regiones. La promesa de campaña de la **Agenda 50/50** ha quedado reducida a una propuesta gubernamental que roza la burla autonómica: ceder apenas un **1% de coparticipación tributaria** (unos 550 a 560 millones de bolivianos anuales recién desde 2027) a repartirse entre las nueve gobernaciones, condicionado además a que los gobiernos departamentales absorban la carga de los ítems de salud.

Mientras La Paz y Beni aceptaron la cifra como una mesa inicial de alivio, el bloque conformado por Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro ha rechazado con firmeza esta limosna fiscal, exigiendo un piso mínimo del 5%. **Futuro Bolivia** respalda de manera categórica la demanda de las regiones: el país necesita un verdadero Pacto Fiscal que transfiera recursos y competencias reales a los territorios, no un centralismo reciclado que descentraliza obligaciones mientras retiene la billetera en los ministerios.

3. De las "31 maletas" al asilo de Nadia Beller: la justicia como arma del Ejecutivo

El fenómeno más grave de este primer año de gestión no radica únicamente en la fragilidad económica, sino en la forma en que el gobierno de Rodrigo Paz ha decidido compensar su pérdida de legitimidad social: mediante la captura y el uso discrecional del aparato judicial y fiscal.

Por un lado, el escándalo de las **31 maletas ingresadas por el aeropuerto de Viru Viru** a finales de noviembre de 2025 —utilizando un pasaporte diplomático anulado por la exdiputada Laura Rojas para eludir escáneres con cerca de 620 kilos de carga— ha terminado por dinamitar los cimientos del sistema judicial. Las recientes declaraciones del exjuez Hebert Zeballos, confirmando que el cargamento contenía marihuana californiana y señalando una red de protección encabezada por el exfiscal general Roger Mariaca, junto a las sindicaciones contra el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo (hoy declarado en el exilio), revelan hasta qué punto el narcotráfico y las mafias judiciales perforaron las instituciones del Estado. La destitución de la fiscal Delmy Guzmán apenas rasguña la superficie de una podredumbre estructural.

Pero mientras el Gobierno intenta capitalizar estos escándalos para proyectar una imagen de "mano dura" y recuperar capacidad de mando, el caso de la abogada y activista **Nadia Beller** expone la otra cara de la moneda: la persecución selectiva y el encubrimiento del poder.

En la Bolivia de noviembre de 2026, el Ministerio Público despliega todo su rigor no para investigar los actos de corrupción revelados en los audios del entorno presidencial, sino para cazar a quienes los expusieron.

La concesión de asilo diplomático por parte de México a Nadia Beller - quien ingresó a la sede diplomática en La Paz el pasado miércoles tras salir de su domicilio en Santa Cruz sin que la propia escolta policial apostada en su puerta lo advirtiera durante días— constituye una bofetada internacional a la narrativa democrática del Ejecutivo. Beller, quien ya había sobrevivido a un atentado en agosto, denunció con claridad el trasfondo de su situación: tras la difusión de una decena de audios atribuidos al exconsultor presidencial argentino Fernando Cerimedo que comprometen a altos funcionarios del Gobierno en presuntas irregularidades y negociados, la maquinaria fiscal volcó sus baterías a perseguir la filtración y acorralar a los denunciantes en lugar de investigar los delitos de cuello blanco del oficialismo. La reticencia de la Cancillería boliviana a otorgar de inmediato el salvoconducto respectivo confirma que la justicia sigue operando bajo consigna política.

4. La alternativa de Futuro Bolivia: institucionalidad real frente al continuismo de las mañas

El balance de esta semana demuestra que el fin del ciclo del MAS no significó el fin de las prácticas que degradaron la democracia boliviana. Rodrigo Paz llegó al poder prometiendo renovación con un partido prestado, pero al cabo de un año ha optado por gobernar con los mismos reflejos del pasado: centralismo fiscal frente a las regiones, imposición frente a los sectores sociales y sometimiento del Ministerio Público para blindar a su círculo íntimo y amedrentar a las voces críticas.

Desde **Futuro Bolivia**, planteamos que el país no puede elegir entre el retorno al populismo corporativo que quebró al Estado y un oficialismo errático que utiliza el crédito externo para comprar tiempo mientras perfecciona la persecución judicial. Nuestra posición política frente a la coyuntura se resume en cuatro ejes innegociables:

1. **Independencia judicial absoluta y fin del *lawfare*:** Rechazamos el uso del Ministerio Público como brazo operativo del Ejecutivo. Exigimos la entrega inmediata del salvoconducto para Nadia Beller en respeto al derecho internacional de asilo, una investigación independiente sobre el contenido de los audios del caso Cerimedo y una reforma estructural de raíz que barra con las mafias expuestas en el caso Viru Viru sin sustituirlas por fiscales sumisos al turno gobernante.
2. **Autonomía plena y Pacto Fiscal 50/50 sin trampas:** Rechazamos el 1% de coparticipación por ser inviable y centralista. Proponemos un cronograma inmediato de redistribución tributaria que inicie con una transferencia real de recursos a gobernaciones y municipios, garantizando que los impuestos de los ciudadanos financien salud, educación e infraestructura en sus propias regiones.
3. **Reactivación productiva y defensa de la mesa popular:** Frente a la subida del pan y la recesión proyectada, exigimos transparentar los compromisos asumidos con el FMI, liberar las trabas a la producción agropecuaria, asegurar insumos para los sectores productivos sin redes de corrupción estatal y abrir un diálogo técnico real con el Magisterio antes de imponer reformas administrativas sin presupuesto.
4. **Respeto a la institucionalidad parlamentaria:** Exhortamos a que la sesión del 11 de noviembre en la ALP marque el retorno a la legalidad constitucional, superando el caudillismo y las disputas facciosas entre el Ejecutivo, la Vicepresidencia y las directivas camarales.

Bolivia no salió de veinte años de hegemonía del MAS para resignarse a que los nuevos inquilinos del poder hereden y perfeccionen el garrote judicial. El verdadero cambio exige coraje para descentralizar el poder, transparentar el Estado y devolverle a la justicia su venda constitucional.

La Paz 09 de noviembre de 2026